

=====  
Ref. Quejas nº 051966, 052032 y 052039  
=====

Asunto: situación del alumnado de Educación Especial en centros públicos

Hble. Sr.:

Agradecemos su escrito en el que nos contesta a las quejas arriba referenciadas, formuladas respectivamente por D. (...), D<sup>a</sup> (...) y D<sup>a</sup> (...) y que por guardar identidad de contenido, y a los meros efectos procedimentales, fueron acumuladas, relativas a la demanda de un puesto de Fisioterapeuta en el CP El Fabraquer de El Campello.

En sus escritos de queja, los interesados, padres de niños con necesidades educativas especiales, y escolarizados en el CP El Fabraquer de El Campello (Alicante), solicitaban la intervención del Síndic de Greuges para que la Administración Educativa procediera a la dotación de un puesto de Fisioterapeuta para el CP citado, ya que sus hijos, según los informes emitidos por la Dirección Territorial de Educación de Alicante, habían sido escolarizados en aula de Educación Ordinaria Infantil (nivel 3 años) y precisaban de los siguientes recursos:

- Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica
- Maestro/a especialista en audición y lenguaje
- Educador/a
- Fisioterapeuta

El CP El Fabraquer disponía, efectivamente, de los tres primeros profesionales, pero no así de Fisioterapeuta, indispensable para el desarrollo de sus hijos, y para 7 niños más en idéntica situación.

Considerando que las quejas reunían los requisitos establecidos en los artículos 12 y 17 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, fueron admitidas dando traslado de la misma, de conformidad con lo determinado en el artículo 18.1 de la citada Ley, a la Secretaría Autonómica de Educación y a la de

Administraciones Públicas con el objeto de contrastar las alegaciones formuladas por dichos ciudadanos con el ruego de que nos remitiesen información suficiente sobre la realidad de las mismas, y demás circunstancias concurrentes y extendieran su informe a concretar las previsiones existentes, en su caso, para dotar de un Fisioterapeuta al CP El Fabraquer de El Campello para atender a los alumnos de educación especial del citado centro docente.

La Dirección General de Personal Docente informó lo siguiente:

“- La dotación de educadores de educación infantil en centros de Educación Primaria se regula por la “Orden de 16 de julio de 2001, por la que se regula la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizados en centros de Educación Infantil (2º ciclo) y Educación Primaria”.

- Desde esta Dirección General de Personal se viene atendiendo, de forma regular y continuada, todas las solicitudes referidas a este tipo de recursos personales (educadores y fisioterapeutas); que son resueltas con la mayor brevedad posible, atendiendo a los criterios establecidos en dicha Orden.
- Se informa, que en lo referente a la queja presentada, una vez recabados todos los informes necesarios, se ha propuesto, con fecha 10 de febrero, la creación de un puesto de fisioterapeuta a tiempo parcial (15 horas) para dicho centro.
- Esta propuesta ha sido remitida al Servicio de Personal Administrativo y Laboral, del Área de Recursos Humanos y Estudios de esta Conselleria, por ser el órgano competente para tramitar dicha petición a la Dirección General de Administración Autonómica, que es la encargada de la creación/provisión de este tipo de personal.”

La Dirección General de Administración Autonómica de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, en contestación a nuestro escrito relativo a las quejas planteadas, informó de que en esa Dirección General, no constaba propuesta de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte referida a la creación de un puesto de trabajo de fisioterapeuta en el C.P. El Fabraquer (El Campello).

Posteriormente y tras una nueva petición de informe a la Administración Educativa, la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte en Alicante, evacuó el siguiente dictamen:

“En contestación a sus escritos de fechas 16-12-2005, 22-12-2005 y 22-12-2005, que tuvieron entrada en el Registro General de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte el 23, 27 y 28 de diciembre de 2005, con números de entrada 101.789, 102.977 y 103.163, respectivamente; en relación con las quejas suscritas por D. (...), D<sup>a</sup> (...) y D<sup>a</sup> (...), sobre la dotación de un puesto de fisioterapeuta en el C.P. “El Fabraquer” de El Campello, le comunico lo siguiente:

1º).- Se procede a la acumulación de las tres quejas suscritas por los interesados al guardar identidad sustancial en los contenidos de las mismas, es decir, la demanda de un fisioterapeuta para el C.P. “El Fabraquer” de El Campello.

2º).- La tramitación de la dotación del fisioterapeuta se inicia con el informe favorable elaborado con fecha 27 de junio de 2005, por el Inspector de Educación que tenía asignado el centro docente.

Con fecha 11 de julio se eleva el citado informe con el parecer favorable de éste órgano al Servicio de Gestión de Plantillas de la Dirección General de Personal Docente para toda la tramitación interna que pasa por diversos departamentos, entre ellos por la Dirección General de Enseñanza.

3º).- Con fecha 10 de febrero el Servicio de Gestión y Determinación de Plantillas de Personal Docente emite comunicación dirigida a este órgano por la que comunica que a la vista del informe del Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de Enseñanza, realiza la propuesta de creación de un puesto de fisioterapeuta a tiempo parcial (15 horas), para el C.P. “El Fabraquer” de El Campello, con ámbito de actuación en la localidad; propuesta que ha sido tramitada al Servicio de Personal Administrativo y Laboral de la Subsecretaría, por ser el órgano competente para tramitar dicho expediente de creación a la Dirección General de Administración Autonómica.

4º).- Con fecha 14 de febrero de 2006, por parte de la Subsecretaría de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, se ha trasladado la propuesta de creación del puesto de fisioterapeuta a tiempo parcial (15 horas), para el C.P. “El Fabraquer” de El Campello, a la Dirección General de la Administración Autonómica, que junto a la Dirección General de Presupuestos y Gastos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo son los órganos competentes para la dotación presupuestaria y creación de los puestos de la Administración del Consell.

Una vez se dicte resolución de clasificación del puesto de trabajo por la Dirección General de Administración Autonómica, incorporándolo a la relación de puestos de trabajo, se remitirá a la Subsecretaría de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, quien comunicará la necesidad de provisión del puesto y solicitará su autorización con objeto de que se efectúe el oportuno nombramiento.”

La Subsecretaría de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, amplió el contenido del informe de conformidad con los datos facilitados por la Dirección Territorial de Alicante y comunicó qué puestos de dicha provincia, con denominación de Educador de Educación Especial y Fisioterapeutas, estaban pendientes de sustitución en fecha 17-01-2006, por alguno de los supuestos previstos en la Orden de 4 de octubre de 2005 del Conseller de Justicia y Administraciones Públicas, y de conformidad con lo que a continuación se relaciona:

Centro	Puesto	Petición Centro	Sustitución
CP Antonio Sequeros (Orihuela)	Educador Educación Especial	10-01-06	06-03-06

CP Antonio Sequeros (Orihuela)	Educador Educación Especial	10-01-06	
CP Antonio Machado (Elda)	Educador Educación Especial	08-01-06	06-03-06
CEE Tamarit (Elche)	Educador	09-12-05	

Centro	Puesto	Petición Centro	Sustitución
CP Joaquin M <sup>o</sup> López (Alicante)	Fisioterapeuta	24-11-05	01-02-06
CEE Miguel Cervantes (Elda)	Fisioterapeuta	15-09-05	01-02-06

El régimen transitorio de la citada Orden de 4 de octubre de 2005 implica que las sustituciones de Educadores de Educación Especial y Fisioterapeutas deben cubrirse según el criterio adoptado por la Comisión de Seguimiento de Bolsas de Empleo, esto es, con personal de las bolsas constituidas por la Dirección General de Administración Autonómica. No existiendo personal disponible en éstas que hubiese aceptado el nombramiento para las citadas sustituciones, la Dirección General de Administración Autonómica autorizó en fecha 12 de diciembre de 2005 convocar el procedimiento previsto en el art. 8 de la Orden de 10 de noviembre de 2004 de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, con el fin de seleccionar personal para las sustituciones citadas de Fisioterapeutas. Asimismo, mediante autorización de fecha 15-02-2006, de conformidad con el nuevo criterio adoptado por la Comisión de Seguimiento de Bolsas de Trabajo, acordó proceder a la cobertura de las sustituciones de Educadores de Educación Especial mediante el personal seleccionado en un procedimiento celebrado anteriormente.

La situación extraordinaria suscitada por la regulación del régimen transitorio de la Orden de 4 de octubre de 2005 explica la dilación del procedimiento por más tiempo del habitual. No obstante, las nuevas propuestas a aplicar durante la vigente del mismo y, definitivamente, la efectiva aprobación de las bolsas de empleo específicas para sustituciones a gestionar por esta Subsecretaria, reducirán el tiempo de tramitación de los procedimientos de sustitución incidiendo con total seguridad en la mejora del servicio público prestado.”

Las comunicaciones recibidas fueron puestas de manifiesto a los promotores de las quejas al objeto de que formularan las alegaciones que estimasen convenientes, sin que conste la entrada en esta Institución de escrito alguno en el sentido indicado.

La resolución favorable de la cuestión planteada no es óbice para que esta Institución, como garante de los derechos fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, realice diversas consideraciones, ya que la Constitución Española, en su artículo 49, recomienda a los poderes públicos realizar una política de previsión, tratamiento y rehabilitación a favor de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que es preciso prestar la atención especializada que requieren y ampararlos para el disfrute de los derechos que nuestra Carta Magna reconoce a todos en el Título I, y entre ellos, el derecho a la educación, en términos de igualdad efectiva.

Como ya puso de manifiesto la exposición de motivos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad

constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones en la vida económica, social y cultural.

La Constitución Española reconoce en su artículo 14 la igualdad ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. A su vez, el artículo 9.2 de nuestra Norma Fundamental establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que dificulten o impidan su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social. Asimismo, el artículo 10 de la Constitución establece que la dignidad de la persona constituye el fundamento del orden político y la paz social.

En congruencia con estos preceptos, y como ya hemos señalado, el propio texto constitucional, en su artículo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de los derechos.

Consecuencia de esta especial necesidad de protección y promoción de la igualdad de las personas con discapacidad ha sido la paulatina creación de un importante cuerpo legal tendente a garantizar aquélla en los distintos ámbitos susceptibles de actuación de los poderes públicos.

De esta forma, la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre Integración Social de los Minusválidos, tras establecer en su artículo 1 que “los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en los derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce, en razón de la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias”, preceptuaba en su artículo 3 que “los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1, constituyendo una obligación del Estado la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social”, añadiendo a continuación que “a estos efectos estarán obligados a participar, para su efectiva realización, en su ámbito de competencias correspondientes, la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, los Sindicatos, las entidades y organismos públicos y las asociaciones y personas privadas”.

Por su parte, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, anteriormente mencionada, insistiendo en la necesidad de garantizar la plena integración social de las personas con discapacidad, elevó a la categoría de principio rector de la Ley, entre otros, el de normalización, entendido como “el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una

vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier persona normal”.

Al abrigo de las normas anteriormente enunciadas, la Generalitat Valenciana ha asumido como propios los objetivos anteriormente reseñados, dictando al efecto numerosas normas legales que comparten, como principio inspirador, el mandato constitucional de defensa y efectividad real del principio de igualdad. En este sentido, destaca de manera especial la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad.

Esta norma reconoce, en su exposición de motivos, que constituyen principios esenciales de la Ley, que como tal debe marcar la actuación de las Instituciones de la Generalitat, los de “autonomía, participación, principio de integración y el de responsabilidad pública, mediante el cual la Generalitat procurará paulatinamente aumentar la dotación económica presupuestaria para alcanzar la plena realización de los principios que vienen recogidos en esta Ley, y en especial, para que las personas con discapacidad puedan disfrutar del principio de igualdad de oportunidades”, de manera que la Generalitat pueda “dar una respuesta adecuada y coordinada a las necesidades de las personas con discapacidad, con la finalidad última de mejorar sus condiciones de vida y conseguir su integración sociolaboral” . Consecuencia de esta declaración resulta el mandato normativo contenido en el artículo 1 de la Ley, de acuerdo con el cual “constituye el objeto primordial de la presente Ley la regulación de la actuación de las administraciones públicas valencianas dirigida a la atención y promoción del bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad, posibilitando su habilitación, rehabilitación e integración social con el fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad reconocido por la Constitución Española. Se regulan los principios rectores de la actuación de dicha Administración en cuanto a la prevención de las discapacidades, la ordenación de la tipología de centros y servicios de acción social destinados a las personas con discapacidad y la fijación del correspondiente régimen de infracciones y sanciones”, siendo por ello mismo aplicables sus disposiciones “en todas las actuaciones y servicios que, en el ámbito de las personas con discapacidad y dentro del territorio de la Comunidad Valenciana, lleven a cabo la Administración de la Generalitat, o sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, así como las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana, así como las entidades públicas y privadas que colaboren con ellas”.

Por su parte, el artículo 4, desarrollando legalmente los principios manifestados en la exposición de motivos, declara que “la Administración de la Generalitat, o sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, adoptarán medidas tendentes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, eliminando los obstáculos que impidan su integración social, rigiéndose en sus actuaciones por los siguientes principios:

1. *Principio de no discriminación*, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, tanto directa como indirecta, por motivo de discapacidad, ni discriminación en la forma de negarse a facilitar los ajustes razonables, para que el derecho a la igualdad de trato sea real y efectivo.

2. *Principios de autonomía*, promoviendo el mayor grado de autosuficiencia y libre elección de las personas con discapacidad, sin perjuicio de prestarles la asistencia adecuada en los casos en que resulte necesaria por su grado y tipo de discapacidad. Se promoverá, mediante los programas y actuaciones correspondientes el acceso de las personas con discapacidad a una vida independiente caracterizada por la autosuficiencia económica y la asunción de protagonismo en las decisiones que afectan a su desenvolvimiento diario.

3. *Principio de participación*, como derecho de las personas con discapacidad y de las organizaciones y asociaciones que las representen a intervenir en el proceso de toma de decisiones que afecten a sus condiciones de vida.

4. *Principio de integración*: la promoción educativa, cultural, laboral y social de las personas con discapacidad, se llevará a cabo procurando su inserción en la sociedad a través del uso de los recursos generales de que se disponga. Sólo cuando por las características de su discapacidad requieran una atención específica ésta podrá prestarse a través de servicios y centros especiales.

5. *Principio de igualdad de oportunidades*: se garantizará el acceso de las personas con discapacidad a los bienes y recursos generales de la sociedad, si es necesario a través de recursos complementarios y, en cualquier caso, eliminando toda forma de discriminación y limitación que le sea ajena a la condición propia de dichas personas. En la aplicación de este principio, las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las necesidades particulares de las personas o colectivos de personas con discapacidad, sobre todo en cuanto hace al diseño y provisión de servicios y recursos específicos para cada una de ellas, procurando garantizar la cobertura territorial.

6. *Principio de responsabilidad pública*: la Administración de la Generalitat, o sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat contempladas en la legislación pública valenciana, procurarán, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, los medios y destinará los recursos financieros, técnicos, humanos y organizativos necesarios para alcanzar la plena realización de los principios que se enumeran en el presente artículo. Igualmente, las corporaciones locales, las entidades y organismos públicos, los agentes sociales y las asociaciones y personas privadas, en sus ámbitos de competencias correspondientes, participarán y colaborarán con ese mismo fin”.

Por lo que hace referencia al ámbito educativo, la Ley indica de manera precisa en su artículo 18 que “la Conselleria u organismo de la Generalidad Valenciana con competencias en materia de educación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes, será la encargada de garantizar una política de fomento de la educación y del proceso educativo adecuado para las personas con discapacidad”, añadiendo con posterioridad en el artículo 19 que “f) Se facilitará la puesta en marcha de opciones educativas tendentes a conseguir el desarrollo integral del alumnado con discapacidad” y “g) La administración de la Generalitat dotará a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, a todos los niveles, de los

recursos necesarios, humanos y/o materiales, para atender las necesidades del alumnado con discapacidad, así como implementará las adaptaciones curriculares necesarias para afrontar con éxito la tarea educativa, llevando a cabo para ello las agrupaciones que resulten pertinentes”.

En el orden educativo, la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo), reconoce en su artículo 36 el derecho que asiste al alumnado con necesidades educativas especiales, sean temporales o permanentes, a disponer de los recursos necesarios para alcanzar, dentro del sistema educativo, los objetivos establecidos, con carácter general, para todos los alumnos.

En el mismo sentido, el artículo 37 del mismo cuerpo legal, dispone que para lograr las finalidades señaladas en el artículo, el sistema educativo deberá disponer de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, como también de los medios y materiales precisos para la participación en el proceso de aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales.

En el ámbito de la legislación educativa, el Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de ordenación de la educación para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales ha sido el encargado de desarrollar y plasmar los principios anteriormente reseñados en este específico ámbito.

El artículo 3 de esta norma indica de manera incontestable y precisa que “1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y el derecho de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales a una educación de calidad, la administración educativa de la Generalitat Valenciana garantizará las condiciones, las medidas y los medios necesarios en la forma en que establece el presente Decreto. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia velará para que se eliminen las barreras físicas y comunicativas.

2. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia velará para que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente con la ayuda precisa para progresar en su desarrollo y proceso de aprendizaje, de acuerdo con sus capacidades”.

Por su parte, el artículo 4, con la finalidad de garantizar la efectividad de estos derechos, establece que “la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia dotará a los centros docentes sostenidos con fondos públicos con recursos, medios y apoyos complementarios a los previstos con carácter general en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, cuando el número de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales escolarizados en ellos y la naturaleza de las mismas así lo requiera”, añadiendo a renglón seguido que, en consecuencia, “La administración educativa facilitará a los centros docentes públicos dependientes de la Generalitat Valenciana, el equipamiento didáctico y los medios técnicos precisos que posibiliten la participación de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en todas las actividades escolares” (Artículo 5). Del mismo modo, e insistiendo en este línea de pensamiento, el artículo 10 de esta norma preceptúa que “la administración educativa procurará una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad y mejora

de la enseñanza del alumnado con necesidades educativas especiales. A tal fin, adoptará las medidas oportunas para la cualificación y formación del profesorado, la elaboración de los proyectos curriculares y de la programación docente, la dotación de medios personales y materiales, y la promoción de la innovación e investigación educativa”.

Por su parte, la Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes, en su Disposición Adicional Segunda, referida a la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, aplicables a centros docentes sostenidos con fondos públicos, independientemente de su titularidad, establece que “las administraciones educativas habrán de dotar a los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a estos alumnos. Los criterios para determinar estas dotaciones serán los mismos que para los centros sostenidos con fondos públicos”.

Consecuentemente con cuanto antecede, los alumnos con necesidades educativas especiales tienen derecho a que la Administración Educativa les facilite el acceso a los recursos, medios materiales o ayudas específicas para su participación en el proceso de aprendizaje en condiciones de igualdad respecto a los demás alumnos, de tal suerte que puedan alcanzar los objetivos educativos establecidos con carácter general.

La problemática planteada por los presentes expedientes de queja debe ser analizada partiendo de las normas anteriormente expresadas y, sobre todo, de los principios y de la filosofía que de ellas dimanen. El simple estudio de la normativa que sobre personas con discapacidad ha ido surgiendo al abrigo de la Constitución española y, en especial, de su artículo 49, pone de manifiesto que el objetivo final que la actuación de los poderes públicos debe perseguir en este ámbito, y en la medida de sus posibilidades, garantizar, es la mejora de la calidad de vida de este grupo heterogéneo de personas, mediante la consecución de su plena integración social y, por ello mismo, mediante el pleno logro de su igualdad efectiva con el resto del cuerpo social.

En este sentido, se puede afirmar, sin miedo a errar en exceso, que todas las obligaciones y deberes de actuación que la legislación impone a los poderes públicos se hallan íntimamente destinados a la consecución de estos objetivos. Por ello mismo, y considerado a la inversa, la actuación de los poderes públicos en este ámbito debe ser analizada y juzgada en función de la contribución que la misma realice a la satisfacción de aquéllos.

En este sentido, y a pesar del cumplimiento formal de las obligaciones más inmediatas que pesan sobre la Administración educativa (evaluación de la discapacidad y escolarización del menor en centro adecuado a sus necesidades, dotados de los medios personales que resulten precisos), la actuación pública descrita con anterioridad no puede merecer, por parte de esta Institución, la consideración de plenamente ajustada a Derecho y respetuosa con los derechos de los interesados.

En efecto, de la normativa anteriormente enunciada se deduce que, en aras a la satisfacción del principio de autonomía y como consecuencia del principio de responsabilidad pública, las Administraciones Públicas deben garantizar la existencia de los medios técnicos y personales necesarios para garantizar la escolarización de las personas con discapacidad, promoviendo de esta forma tanto la efectividad del derecho a una educación de calidad como la integración social, permitiendo con ello la consiguiente consecución de la mejora en la calidad de vida de estas personas.

La satisfacción tardía y parcial de los derechos anteriormente mencionados debe ser entendida como una causa directa de perjuicios para la igualdad efectiva en el disfrute del derecho a la educación, y por ende, para la plena integración social de los menores y, por ello, como un incumplimiento de las obligaciones que, en este ámbito, pesan sobre los poderes públicos.

Por cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, formulamos a la Administración Educativa las siguientes sugerencias:

- Primera. Que adopte cuantas medidas organizativas y presupuestarias sean precisas para asegurar la dotación de recursos personales y materiales en aras del adecuado disfrute, por parte de los alumnos con discapacidad, del derecho a una educación de calidad en condiciones de plena igualdad y efectividad.

- Segunda. Que, en casos como el analizado, se agilice al máximo -en el ámbito de las respectivas competencias de cada órgano involucrado en ese proceso-, tanto los trámites administrativos de creación y provisión de puestos de trabajo, como -y especialmente- los trámites previos de evaluación de futuras necesidades, todo ello en aras a garantizar en plazo la adecuada escolarización de los alumnos discapacitados.

Asimismo, de acuerdo con la normativa citada, le agradecemos nos remita en el plazo de un mes, el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación de la Sugerencia que se realiza, o en su caso, las razones que estime para no aceptarla.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir del mes siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página Web de la Institución.

Le saluda atentamente,

Emilia Caballero Álvarez  
Síndica de Greuges e.f. de la Comunitat Valenciana.